



DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN

JUZGADO ONCE DE FAMILIA
Medellín, once de agosto de dos mil veintitrés

Proceso	Adjudicación Judicial de Apoyos para la Realización de Actos Jurídicos (Revisión de Interdicción)
Demandante	María Lucelly Yepes Gutiérrez
Demandado	Abad de Jesús Yepes Gutiérrez
Radicado	05001-31-10-011-2023-00365-00
Providencia	Interlocutorio N° 654
Instancia	Primera
Decisión	Rechaza Demanda – Remite al Juzgado Quinto de Familia de Medellín

ANTECEDENTES

Correspondió por reparto a esta Agencia Judicial la presente demanda contentiva de la pretensión de Adjudicación Judicial de Apoyos para la Realización de Actos Jurídicos promovida por María Lucelly Yepes Gutiérrez en contra de Abad de Jesús Yepes Gutiérrez.

Sin embargo, previo a avocar su conocimiento, se le hace imperioso a este servidor pronunciarse sobre la competencia para conocer de ésta, con arreglo en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Enseñan los incisos 1º y 2º del art. 56 de la Ley 1996 de 2019 que “En un plazo no superior a treinta y seis (36) meses contados a partir de la entrada en vigencia del Capítulo V de la presente ley, **los jueces de familia que hayan adelantado procesos de interdicción** o inhabilitación **deberán citar de oficio a las personas que cuenten con sentencia de interdicción** o inhabilitación anterior a la promulgación de la presente ley, al igual que a las personas designadas como curadores o consejeros, **a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicación judicial de apoyos**”.

“En este mismo plazo, las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación podrán solicitar la revisión de su situación jurídica **directamente ante el juez de familia que adelantó el proceso de Interdicción** o inhabilitación. Recibida la solicitud, el juez citará a la persona bajo medida de interdicción o inhabilitación, al igual que a las personas designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado **para determinar si requieren de la adjudicación judicial de apoyos**”. (énfasis adrede).

De tal suerte que, estimar los apoyos formales que para la realización de actos jurídicos requiera la persona bajo medida de interdicción le compete, como regla de principio, al juez de familia quien la decretó, amén de su revisión, lo cual no le es facultativo, con miras a su anulación¹.

Lo anterior, habida cuenta que “[e]sta última codificación, (Ley 1996 de 2019) por su parte, otorga especial relevancia a la **continuidad** del funcionario inicialmente cognoscente, al establecer, en su regla 43, que «[c]ualquier actuación judicial relacionada con personas a quienes se les haya adjudicado apoyos será de competencia del Juez que haya conocido del proceso de adjudicación de apoyos», parámetro que, como ha tenido oportunidad de decantarlo esta Corporación al dirimir decursos semejantes, **se justifica por la necesidad de garantizar que el despacho judicial donde reposa la historia clínica, jurídica, familiar y social del beneficiario de las medidas en estudio, mantenga su competencia para adoptar las determinaciones a que haya lugar, en pro de su bienestar y la seguridad jurídica de los asuntos a ella concernientes**” (subraya y negrilla ajenas al texto)

De ese tenor, de cara con el particular, palmario es que esta agencia judicial no es competente para conocer de la acción entre manos, habida cuenta que, como anotó la actora “ABAD DE JESÚS YEPES GUTIÉRREZ nació el 4 de septiembre de 1949 y fue declarado interdicto indefinido el 25 de febrero de 2002 por el JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD EN MEDELLÍN. En dicha providencia se nombró de curadora a su hermana MARÍA NUBIA YEPES GUTIERREZ”, supuesto el cual acreditó con copia de la sentencia número 73 emitida por dicha agencia judicial en la memorada fecha, y que milita en folios 126 a 130 del archivo Nro. 2º del dossier virtual, a la sazón, anotada en las notas marginales del registro civil de la persona por quien se litiga (op.cit. folio 11), lo cual desencarta de plano a esta sede, para conocer este asunto.

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en similar caso, en donde “**se solicitó un apoyo** al señor Eliano Bocoche y, en tal virtud, nombrar al actor como la persona que debe asistirlo” adujo, al desatar un conflicto de competencia que “[e]n el presente asunto, se tiene que **lo solicitado en la demanda, entre otras cosas, se dirige a la revisión de la interdicción** de Eliano Becoche Guachetá. En ese orden, la competencia radica en el Juzgado Sexto de Familia de Cali, quien en sentencia de 11 de julio de 2001 **declaró la interdicción del mencionado ciudadano**”³, postura la cual se ha sostenido en diversos pronunciamientos del citado cuerpo colegiado, en la medida en que guarda y ampara la lógica que reclama las disposiciones que reglamentan la materia, dado que, de las misma no se colige otra cosa que “la continuidad en el conocimiento de las diligencias por parte del primero de los juzgadores enfrentados en este asunto, viene dada en función de un **fuero de atracción** que previó el legislador en su especial empeño de procurar que todas **las cuestiones**

¹ Literal c) del numeral 5º del art. 56 de la ley 1996 de 2019. “Una vez vencido el término para la práctica de pruebas, el juez escuchará a los citados y verificará si tienen alguna objeción. Posteriormente, el juez procederá a dictar sentencia de adjudicación judicial de apoyos, la cual deberá: (...) c) Oficiar a la Oficina de Registro del Estado Civil para que **anule** la sentencia de interdicción o inhabilitación del registro civil” (énfasis para destacar)

² Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. AC2383-2022

³ Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. AC1675-2023

concernientes a personas en cuyo favor se ha decretado la interdicción o se han concedido apoyos, sean tramitadas por el mismo despacho que las ordenó, en atención a que, al conocer los antecedentes médicos y jurídicos que rodean el asunto, ese estrado está en mejor condición de velar por los intereses del sujeto de especial protección⁴” (subraya y negrilla con énfasis)

Ergo, la competencia para conocer lo pedido, en lo que al fueron de atracción trata, le concierne al Juez Quinto de Familia en Oralidad de Medellín, quien decretó la medida de interdicción de quien ahora de ruego la designación de apoyos, mediante sentencia número 73 el 25 de febrero de 2002, y no a esta judicatura.

Corolario de lo expuesto, este Despacho habrá de declararse incompetente para conocer del asunto y ordenará remitirlo al Juzgado Quinto de Familia en Oralidad de Medellín, para que asuma su conocimiento.

Sin necesidad de otras consideraciones, **EL JUEZ ONCE DE FAMILIA EN ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MEDELLIN,**

RESUELVE:

PRIMERO: RECHAZAR POR COMPETENCIA la presente demanda contentiva de la pretensión de **ADJUDICACIÓN JUDICIAL DE APOYOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS** promovida por **MARÍA LUCELLY YEPES GUTIÉRREZ** en contra de **ABAD DE JESÚS YEPES GUTIÉRREZ**, por el fueron de atracción.

SEGUNDO: ORDENAR la remisión del expediente al Juzgado Quinto de Familia en Oralidad de Medellín, a través de la oficina judicial.

TERCERO: Hágase las anotaciones respectivas en el sistema de gestión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



CARLOS HUMBERTO VERGARA AGUDELO
JUEZ

⁴ Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. AC1507-2022

Firmado Por:
Carlos Humberto Vergara Agudelo
Juez
Juzgado De Circuito
Familia 011 Oral
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **37e725196ab819633cd4a62667ee38d1bf65802bf427ae9f1c3e12f66c010a7c**

Documento generado en 11/08/2023 09:31:58 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>